

No. 14668. Multilateral

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Peru

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
14 November 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio,
14 November 2016*

N° 14668. Multilatéral

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4

Pérou

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 14 novembre 2016

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 14 novembre 2016

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

Misión Permanente del Perú
ante las Naciones Unidas

Permanent Mission of Peru to
the United Nations

7-1-SG / 26

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas – Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 076-2016-PCM publicado el pasado 06 de octubre de 2016, cuya copia se acompaña, se declaró por sesenta días, a partir del 11 de octubre de 2016, el Estado de Emergencia en el distrito de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, contemplados en los incisos 9, 11, 12 y 24(f) del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 9º, 12º, 17º y 21º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, con el motivo de consolidar la pacificación de la zona y del país.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 10 de noviembre de 2016

Declaran Estado de Emergencia en diversos distritos de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín

**DECRETO SUPREMO
N° 076-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, es obligación del Gobierno Constitucional garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la tranquilidad pública y al adecuado funcionamiento de los servicios básicos

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se establece el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, estableciendo en su artículo 4 que la intervención de las Fuerzas Armadas en defensa del Estado de Derecho y protección de la sociedad se realiza dentro del territorio nacional con la finalidad de hacer frente a un grupo hostil, conduciendo operaciones militares, previa declaración del Estado de Emergencia, cuando las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno;

Que, el artículo 12 del referido Decreto Legislativo N° 1095, establece que durante la vigencia del Estado de Emergencia, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas designa el comando operacional para el control del orden interno, con la participación de la Policía Nacional del Perú, la que previa coordinación, cumple las disposiciones que dicte el Comando Operacional;

Que, conforme al artículo 3 de la norma acotada, se considera grupo hostil a la pluralidad de individuos en el territorio nacional, que reúnen tres condiciones: (i) están *minimamente* organizados; (ii) tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada y por medio de armas de fuego; y, (iii) participan en las hostilidades o colaboran en su realización;

Que, en ese orden de ideas, se precisa que la actuación de los remanentes terroristas con la colaboración y participación del narcotráfico, constituye un grupo hostil, toda vez que reúnen las condiciones antes señaladas;

Que, asimismo, el numeral 13.2 del artículo 13 de la norma en mención, establece que el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra un grupo hostil durante el Estado de Emergencia, se sujeta a las reglas de enfrentamiento, ejecutándose las operaciones de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario;

Que, mediante el Oficio N° 4773 CCFFAA/SG de fecha 9 de setiembre de 2016 y el Oficio N° 5135 CCFFAA/D-3/DCT de fecha 27 de setiembre de 2016, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha informado que aún subsisten las condiciones para la declaratoria del Estado de Emergencia en el distrito de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia,

Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oroncco, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín; recomendando que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno de los distritos mencionados con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar la zona de influencia del territorio a ser declarado en emergencia y mantener la unidad de mando realizando operaciones integradas;

Que, el Decreto Supremo N° 085-2015-PCM del 11 de diciembre de 2015, delimita el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en las zonas declaradas en Estado de Emergencia, por lo que se advierte la necesidad de derogar dicho dispositivo que señala que la intervención de las Fuerzas Armadas en el VRAEM se realiza únicamente en acciones contra el terrorismo, dejando actuar a la Policía Nacional del Perú frente al narcotráfico y demás ilícitos, cuando existen suficientes elementos que hacen evidente que los remanentes terroristas y el narcotráfico actúan de manera conjunta;

Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 071-2016-PCM del 15 de setiembre de 2016, se resolvió prorrogar el Estado de Emergencia en el distrito de Echarate, ubicado en la provincia de La Convención del departamento de Cusco, con control del orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú que vence el 11 de octubre de 2016.

Que, estando a lo recomendado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, resulta necesario declarar el Estado de Emergencia con el control del orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas en el distrito de Echarate, ubicado en la provincia de La Convención del departamento de Cusco, a partir del 11 de setiembre de 2016, por lo que corresponde derogar el Decreto Supremo N° 071-2016-PCM;

Que, de conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118°, el numeral 1) del artículo 137° de la Constitución Política del Perú y el literal b) del numeral 2) del artículo 4° de la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaratoria de Estado de Emergencia

Declárese el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 11 de octubre de 2016, en el distrito de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta, en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oroncco, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de derechos constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en las circunscripciones señaladas

en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24), apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3.- Control del Orden Interno

Disponer que las Fuerzas Armadas asuma el control del Orden Interno, en tanto dure el Estado de Emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo. La Policía Nacional del Perú apoya a las Fuerzas Armadas para el logro de dicho objetivo en los distritos declarados en Estado de Emergencia.

Artículo 4.- Intervención de las Fuerzas Armadas

La actuación de las Fuerzas Armadas se rige por las normas del Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1095.

Artículo 5.- Derogación

Deróguese el Decreto Supremo N° 085-2015-PCM y el Decreto Supremo N° 071-2016-PCM a partir del 11 de octubre de 2016.

Artículo 6.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

MARIANO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 076-2016-PCM, published on 6 October 2016 (copy attached), a state of emergency has been declared for 60 days, with effect from 11 October 2016, in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa, in the Province of Huanta; in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiuay, in the Province of La Mar, in the Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma and Andaymarca, in the Province of Tayacaja, in the Department of Huancavelica; in the Districts of Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen, in the Province of La Convención, in the Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo, in the Province of Satipo; in the Districts of Andamarca and Comas, in the Province of Concepción; and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca, in the Province of Huancayo, in the Department of Junín.

During the state of emergency, the rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, and in articles 9, 12, 17 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, will be suspended in order to consolidate peace in the area and in the country as a whole.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 10 November 2016

State of emergency declared in various districts of the Departments of Ayacucho, Huancavelica, Cusco and Junín

Supreme Decree No. 076-2016-PCM

The President of the Republic

Considering:

That article 44 of the Political Constitution of Peru provides that the primary duties of the State include guaranteeing the full enjoyment of fundamental rights, protecting the population from security threats and promoting the general welfare based on justice and the comprehensive and balanced development of the nation;

That the constitutional Government has an obligation to guarantee the right of citizens to order, public peace and the proper functioning of basic services;

That Legislative Decree No. 1095 established the legal framework governing the principles, forms, conditions and limits concerning the use of force by the armed forces in the national territory, establishing in article 4 thereof that the intervention of the armed forces to defend the rule of law and to protect society is carried out within the national territory in order to confront a hostile group by conducting military operations, subject to a declaration of a state of emergency, when the armed forces assume control of internal order;

That article 12 of the aforementioned Legislative Decree No. 1095 establishes that for the duration of the state of emergency, the joint command of the armed forces designates the operational command for the control of public order, with the participation of the National Police of Peru, which subject to coordination, complies with whatever provisions are set out by the operational command;

That, pursuant to article 3 of the Decree in question, hostile groups are defined as a plurality of individuals in the national territory who meet the three conditions of (i) having a minimum degree of organization; (ii) having the capacity and intention of confronting the State in a prolonged manner by means of firearms; and (iii) participating in the hostilities or collaborating in their conduct;

That, in this connection, the remaining terrorists, owing to their actions and as a result of their collaboration with and the participation of drug traffickers, constitute a hostile group, falling under the aforementioned definition;

That, also, article 13.2 of the Decree establishes that the use of force by the armed forces against a hostile group during a state of emergency is subject to the rules of engagement, and operations are conducted in accordance with international humanitarian law;

That, in note No. 4773 CCFFAA/SG of 9 September 2016 and in note No. 5135 CCFFAA/D-3/DCT of 27 September 2016, the joint command of the armed forces reported that the circumstances for a declaration of a state of emergency still prevail in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa, in the Province of Huanta; in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiway in the Province of La Mar, in the Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de

Tucuma and Andaymarca in the Province of Tayacaja, in the Department of Huancavelica; in the Districts of Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen, in the Province of La Convención, in the Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo, in the Province of Satipo; in the Districts of Andamarca and Comas, in the Province of Concepción; and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca, in the Province of Huancayo, in the Department of Junín, recommending that the armed forces take control of public order of the aforementioned districts with the support of the National Police of Peru, in order to secure the area of influence of the territory to be declared under a state of emergency and to maintain a united command by conducting joint operations;

That Supreme Decree No. 085-2015-PCM of 11 December 2015 set out the limits of the scope of action of the armed forces and the National Police of Peru in the areas in which a state of emergency has been declared, indicating that the intervention of the armed forces in the Apurímac, Ene and Mantaro river valley be conducted solely to counter terrorism, leaving to the National Police of Peru activities to address drug trafficking and other crime, and that the said instrument should be repealed, as there are sufficient elements to prove that the remaining terrorists and drug traffickers are conducting their activities jointly;

That, also, by Supreme Decree No. 071-2016-PCM of 15 September 2016, the state of emergency in effect until 11 October 2016 in the District of Echarate, in the Province of La Convención, in the Department of Cusco, pursuant to which the National Police of Peru was made responsible for public order, was extended;

That, pursuant to the recommendations of the joint command of the armed forces, a state of emergency giving control of public order to the armed forces in the District of Echarate, in the Province of La Convención, in the Department of Cusco, should be declared in effect from 11 September 2016, requiring that Supreme Decree No. 071-2016-PCM should be repealed;

That, pursuant to the provisions of article 118, paragraphs 4 and 14, article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, and article 4, paragraph 2 (b), of Act No. 29158, Organic Law of the Executive Branch; and with the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1. Declaration of a state of emergency

A state of emergency is hereby declared in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa, in the Province of Huanta; in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchihuay, in the Province of La Mar, in the Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Suncubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma and Andaymarca, in the Province of Tayacaja, in the Department of Huancavelica; in the Districts of Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen, in the Province of La Convención, in the Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo, in the Province of Satipo; in the Districts of Andamarca and Comas, in the Province of Concepción; and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca, in the Province of Huancayo, in the Department of Junín for a period of 60 days, beginning on 11 October 2016.

Article 2. Suspension of constitutional rights

During the state of emergency and in the locations referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home, and freedom of assembly and movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3. Control of public order

The armed forces shall assume control of public order for the duration of the state of emergency declared in article 1 of the present Supreme Decree. The National Police of Peru shall support the armed forces to that end in the districts where a state of emergency has been declared.

Article 4. Intervention of the armed forces

The actions of the armed forces shall be governed by the rules of international humanitarian law, in accordance with the provisions of Legislative Decree No. 1095.

Article 5. Repeal

Supreme Decree No. 085-2015-PCM and Supreme Decree No. 071-2016-PCM shall be repealed beginning 11 October 2016.

Article 6. Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 5 October 2016.

Pedro Pablo Kuczynski Godard
President of the Republic

Fernando Zavala Lombardi
President of the Council of Ministers

Mariano González Fernández
Minister of Defence

Carlos Basombrio Iglesias
Minister of the Interior

María Soledad Pérez Tello
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques (Secrétariat de l'Organisation) et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer que le décret suprême n° 076-2016-PCM publié le 6 octobre 2016 et dont le texte est joint à la présente, porte déclaration de l'état d'urgence à partir du 11 octobre 2016, pour une durée de soixante jours, dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiway de la province de La Mar (département de Ayacucho), dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcumbamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahunca de la province de Huancayo (département de Junín).

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, 10 novembre 2016

**Déclaration de l'état d'urgence dans divers districts des départements de Ayacucho,
Huancavelica, Cusco et Junín**

Décret suprême n° 076-2016-PCM

Le Président de la République

Considérant :

Que l'article 44 de la Constitution politique du Pérou dispose que l'État est tenu de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux, de protéger la population des risques menaçant sa sécurité et de veiller au bien-être général, fondé sur la justice et le développement intégral et équilibré de la nation;

Que le Gouvernement constitutionnel est tenu de garantir le droit des citoyens à l'ordre, à la tranquillité publique et au bon fonctionnement des services de base;

Que le décret législatif n° 1095 établit le cadre juridique qui régleme les principes, les formes, les conditions et les limites de l'emploi et de l'utilisation de la force par les Forces armées sur le territoire national en disposant dans son article 4 que les Forces armées interviennent sur le territoire national pour défendre l'état de droit et protéger la société contre un groupe hostile en menant des opérations militaires, après déclaration de l'état d'urgence, lorsqu'elles assurent le contrôle de l'ordre interne;

Que l'article 12 du décret législatif n°1095 susmentionné dispose que le Commandement commun des Forces armées désigne le responsable des opérations de contrôle de l'ordre interne pendant la durée de l'état d'urgence, avec la participation de la Police nationale péruvienne qui, sous réserve de coordination préalable, s'acquitte des tâches dictées par le Commandement des opérations;

Que, selon l'article 3 de la norme citée, est considéré comme groupe hostile l'ensemble des individus sur le territoire national qui réunissent les trois conditions suivantes: i) avoir un degré minimum d'organisation, ii) avoir la capacité et la détermination d'affronter l'État de façon prolongée et au moyen d'armes à feu et iii) participer aux hostilités ou collaborer à leur réalisation;

Que, dans cet ordre d'idées, il est précisé que la conduite des terroristes restants, avec la collaboration et la participation des narcotrafiquants, est celle d'un groupe hostile, étant donné qu'ils réunissent les conditions susmentionnées;

Que, de même, le paragraphe 13.2 de l'article 13 de la norme citée dispose que l'emploi de la force par les Forces armées contre un groupe hostile pendant l'état d'urgence est assujéti aux règles relatives à l'affrontement, les opérations étant exécutées conformément au droit international humanitaire;

Que, par les communications n° 4773 CCFFAA/SG du 9 septembre 2016 et n° 5135 CCFFAA/D-3/DCT du 27 septembre 2016, le Commandement commun des Forces armées a fait savoir qu'il subsiste encore des conditions justifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llohegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiway de la province de La Mar (département de Ayacucho), dans les districts

de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andamarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llalla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín), et recommande que les Forces armées assument le contrôle de l'ordre interne des districts mentionnés avec l'appui de la Police nationale péruvienne, dans le but d'assurer leur influence sur le territoire déclaré en état d'urgence et de maintenir l'unité du commandement en effectuant des opérations intégrées;

Que, le décret suprême n° 085-2015-PCM du 11 décembre 2015 délimite le champ d'action des Forces armées et de la Police nationale péruvienne aux zones déclarées en état d'urgence, ce qui fait qu'il est nécessaire d'abroger les dispositions selon lesquelles les Forces armées n'interviennent dans la vallée des rivières d'Apurímac, d'Ene et de Mantaro que pour des actes antiterroristes, la Police nationale péruvienne, elle, intervenant dans le trafic de stupéfiants et autres trafics illicites, alors qu'il existe des éléments de preuve suffisants que les terroristes restants et les narcotrafiquants agissent de concert;

Que, de même, par le décret suprême n° 071-2016-PCM du 15 septembre 2016, il a été décidé de proroger l'état d'urgence dans le district de Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco), le contrôle de l'ordre interne confié à la Police nationale péruvienne arrivant à échéance le 11 octobre 2016;

Que, compte tenu de la recommandation du Commandement commun des Forces armées, il est nécessaire de déclarer l'état d'urgence sous le contrôle de l'ordre interne par les Forces armées dans le district de Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco), à partir du 11 septembre 2016, ce qui revient à abroger le décret suprême n° 071-2016-PCM;

Que, conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4) et 14) de l'article 118, du paragraphe 1) de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou et de l'alinéa b) du paragraphe 2) de l'article 4 de la Loi n°29158 - loi relative à l'organisation du pouvoir exécutif -, après avis favorable du Conseil des ministres et le Congrès de la République devant en être informé;

Décète:

Article premier - Déclaration de l'état d'urgence

Est déclaré l'état d'urgence pour une durée de soixante (60) jours calendaires, à partir du 11 octobre 2016, dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oroncoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiway de la province de La Mar (département de Ayacucho), dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andamarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Viztacán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de

Huancayo (département de Junín).

Article 2 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence déclaré à l'article précédent et dans les circonscriptions y visées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 alinéa f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 - Contrôle de l'ordre interne

Il est décidé que les Forces armées assurent le contrôle de l'ordre interne, pendant la durée de l'état d'urgence déclaré à l'article premier du présent décret suprême. La Police nationale péruvienne appuie les Forces armées pour atteindre cet objectif dans les districts visés par l'état d'urgence.

Article 4 - Intervention des Forces armées

L'intervention des Forces armées est régie par les règles du droit international humanitaire conformément aux dispositions du décret législatif n° 1095.

Article 5 - Abrogation

Le décret suprême n° 085-2015-PCM et le décret suprême n° 071-2016-PCM sont abrogés à partir du 11 octobre 2016.

Article 6 - Contreseing

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de la défense, le Ministre de l'intérieur et la Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le cinq octobre deux mille seize.

Le Président de la République
Pedro Pablo Kuczynski Godard

Le Président du Conseil des ministres
Fernando Zavala Lombardi

Le Ministre de la défense
Mariano González Fernández

Le Ministre de l'intérieur
Carlos Basombrio Iglesias

La Ministre de la justice et des droits de l'homme
María Soledad Pérez Tello